

Sobre la inflación, el tarifazo y otras yerbas

Cr. Luis Lafferriere - Profesor titular de Economía (UNER)

Releyendo una nota que publicara el diario La Nación semanas atrás¹, y a raíz del reciente y brutal tarifazo dispuesto por el gobierno nacional (que en el caso del gas llega hasta el 500%), me parece oportuno destacar algunos datos importantes y realizar breves comentarios adicionales en relación al artículo periodístico, entendiendo que el mismo aborda temas que se relacionan con la preocupante realidad socioeconómica del país.

En primer lugar cabe aclarar que la citada nota toma como base los datos de El Auditor.info, un proyecto periodístico que tiene como promotor institucional a la Asociación del Personal de los Organismos de Control, y cuyos informes merecen absoluta confianza. Aclaro esto para evitar que se caiga en el remanido pretexto de los defensores del relato fantástico kirchnerista, que cuestionan cualquier información que publiquen los diarios vinculados al poder económico, cuando en realidad toda la información que circula en grandes medios del país proviene o del poder económico o del poder político gubernamental a su servicio².

En segundo lugar, vale la pena destacar (o más bien reiterar, porque no se trata de nada nuevo) que toda la información oficial que difunde este gobierno está seriamente sospechada de falsedad y tergiversación deliberada, aunque en la mayoría de los casos no se trata sólo de sospecha sino que se ha demostrado fehacientemente la mentira (hasta en fuentes judiciales), incluso en las últimas semanas hasta por los propios funcionarios oficiales. En el caso de este artículo, se evidencia una vez más la torpe manipulación de los datos sobre gastos e ingresos públicos, que no hacen sino confirmar esa conducta que debería ser castigada (si no fuera porque gran parte del poder judicial está condicionada por el poder ejecutivo, en abierta violación a la división de poderes que dispone nuestra Constitución Nacional). Pero lamentablemente, mienten y mienten con total impunidad, usando para ello los fondos aportados por el trabajo de los argentinos y además haciéndolo en perjuicio de sus intereses.

¹ http://www.lanacion.com.ar//1664729-el-deficit-alcanzo-el-ano-pasado-el-record-de-86000-millones?utm_source=n_tis_notas1&utm_medium=titularS&utm_campaign=NLPol

² Lamentablemente, en este aspecto, continúa en la Argentina el control oligopólico mediático, que impide el pleno ejercicio de los derechos de la comunicación (como la libertad de expresión, el derecho a estar informados de manera transparente, la pluralidad de opiniones en medios estatales, el acceso a la información pública, etc). En tal sentido, toda declamación a los supuestos beneficios de la nueva ley de medios es tan vacía como hipócrita, puesto que a más de tres años de su aprobación los derechos de la comunicación se siguen violando impunemente, en perjuicio de toda la sociedad y en especial de los sectores más relegados y vulnerables. Y es imposible pensar en una democracia plena y efectiva sin la vigencia irrestricta de tales derechos.

En relación al tema del artículo, se pueden destacar varias cuestiones. La más importante tiene que ver con la complicada situación de las finanzas públicas en la Argentina, que pone de relieve no sólo la incapacidad e inmoralidad en el manejo de los recursos de todo el pueblo argentino de parte de quienes gobiernan, sino que refleja el estado lamentable de una sociedad capitalista dependiente en manos de las grandes corporaciones transnacionales y del capital usurero internacional. El déficit fiscal viene complicando seriamente la coyuntura económica, pero más grave aún son las perspectivas futuras, ya que de manera directa e indirecta son muchos millones de argentinos (y cada vez más) que dependen de los recursos y gastos del Estado (empleados, jubilados, proveedores, usuarios de servicios públicos, beneficiarios de subsidios, etc).

El creciente y alarmante déficit fiscal pone en evidencia, entre otras cosas, el fin de la primera etapa del modelo neocolonial extractivista y depredador, de saqueo y corrupción, que se gestó en la segunda mitad de los '90 y se desplegó con fuerza a partir del 2003. La gigantesca caja clientelar que contribuyó al éxito electoral del kirchnerismo, al crecimiento de la agencia de colocación de La C mpera y al ejercicio del poder de manera indiscriminada y corrupta ya no alcanza para todos. Ante el creciente e imparable aumento del d ficit fiscal hay que tomar medidas. Y el Estado neocolonial ha definido (por el poder de los verdaderos due os de la Argentina) dos grandes prioridades: una, el pago de la deuda externa fraudulenta; y la otra, el pago de subsidios astron micos a grandes grupos empresarios. Al acotarse los ingresos fiscales, "el hilo se corta por lo m s delgado" y los recortes vienen por otro lado: ajuste sobre los ingresos de los trabajadores y los pasivos, y mayor deterioro de los servicios p blicos.

Lo que ning n funcionario del gobierno nacional reconoce (como tampoco los dirigentes de la oposici n "responsable" que buscan ser la alternativa para gestionar los intereses del proyecto dominante) es que el pago de esa deuda fraudulenta e inexistente es uno de los principales causantes del desequilibrio presupuestario. Y a pesar de que ya la pagamos varias veces, cada vez pagamos m s y cada vez debemos m s. A costa de los recursos que pertenecen a los jubilados, a costa de saquear las arcas de otros organismos p blicos, y a costa de desfinanciar otras erogaciones que son imprescindibles para mejorar la calidad de vida de la poblaci n.

Respecto de los subsidios, vale aclarar algo que no dice La Naci n ni muchos otros voceros de este modelo neocolonial. Los que reciben esa cantidad monstruosa de dinero no son los subsidios "al transporte y a la energ a". Son actores concretos que se benefician de manera descarada e irregular del destino de los fondos p blicos. Son las corporaciones petroleras que extraen hidrocarburos con precio libre a boca de pozo, y luego generan un fuerte costo para producir energ a y combustible, que el Estado busca atemperar por el explosivo impacto sobre usuarios y consumidores con crecientes subsidios que ocultan el subsidio mayor: la renta petrolera que queda en manos de empresas extranjeras.

Pero cuando los subsidios que ocultan la gigantesca renta petrolera no se pueden mantener, en lugar de poner límites a esa renta extraordinaria que reciben las corporaciones petroleras se prefiere afectar a sectores de menor poder. Y ahí se desatan los tarifazos, que pretenden disfrazarse de medidas de 'justicia redistributiva' cuando en realidad son verdaderos ajustes de naturaleza ortodoxa que pagan los sectores populares.

Adicionalmente, pesan los subsidios a los empresarios amigos del kirchnerismo (que por algo será que reciben tan generosos regalos) que los desvían de manera repudiable y sin controles, poniendo en peligro la seguridad y el bienestar de quienes utilizan esos servicios (como es el caso del transporte, la electricidad, etc).

Finalmente un comentario sobre la emisión y la supuesta causa de la inflación.

Por un lado, es absurdo incluir a la emisión monetaria como una fuente de financiamiento del gasto, antes de considerar el déficit final del presupuesto. Porque en realidad, los denominados "adelantos transitorios" del Banco Central al Tesoro Nacional, si bien técnicamente son préstamos que se deben devolver, a la transitoriedad hay que entenderla en términos de milenios, ya que como no vuelven nunca, constituyen emisión monetaria lisa y llana.

Por otro lado, esta emisión monetaria desmedida, que crece a tasas que superan ampliamente el crecimiento real de la economía, es una vía ilusoria para tapar problemas estructurales, que termina afectando la marcha de los precios. Pero la causa de fondo generadora de la inflación no está en esta emisión monetaria espuria, sino en la estructura oligopólica de los mercados (cuyas empresas líderes son las verdaderas formadoras de precios en alza) y en la estructura productiva desequilibrada y dependiente del país que obliga periódicamente a la devaluación del peso respecto del dólar (y por esa vía desencadena fuertes impactos inflacionarios). En ese marco opera luego la emisión alimentando la suba de precios. Tampoco se puede ignorar la conducta de quienes gobiernan, que han convalidado la elevada inflación porque de esa manera obtienen subas sustanciales de la recaudación tributaria, asentada principalmente en impuestos que recaen sobre los precios que pagan los consumidores finales.

Lamentablemente estos temas no pueden abordarse en los grandes medios de (in)comunicación y (des)información, porque el rol de los mismos (sean del poder económico o del poder político a su servicio) no es de informar adecuadamente, de ser canales de libre expresión, de difundir pluralidad de voces, de descubrir lo que sucede en la realidad, sino precisamente lo contrario: ocultar la realidad y mostrar un mundo ideal en beneficio de los verdaderos dueños de la Argentina.

Paraná 8 de abril de 2014